

Concepción, veinte de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO, OÍDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que ANDRÉS MARIANO STUARDO AMUNÁTEGUI, chileno, soldador, cédula de identidad N° 8722089- 3; CRISTIAN RODRIGO VERGARA NUÑEZ. chileno, operario, cédula de identidad N° 17454340-2; VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ORELLANA, chileno, operador, cédula de identidad N° 7806687-3; MANUEL ERNESTO SEPÚLVEDA ALARCÓN, chileno, mecánico soldador, cédula de identidad N° 7551193-0; LUÍS ALEJANDRO GATICA BRICEÑO, chileno, rectificador de cuchillos, cédula de identidad N° 12699356 2; MARCELO ANDRÉS BECERRA BECERRA, chileno, aseador y estibador de carga, cédula de identidad N° 16897727-1; y RAÚL ARNOLDO MELLA PARRA, chileno, rectificador de cuchillos, cédula de identidad N° 10863047-7, todos domiciliados para estos efectos en Concepción, calle Ongolmo N° 532, vienen en demandar en procedimiento de aplicación general del trabajo, a CONSORCIO MADERERO S.A., representada legalmente por don Luis Carretero Martínez, ambos domiciliados en AVENIDA LAS CONDES N° 11380, OFICINA 62, COMUNA DE VITACURA, SANTIAGO, para que el tribunal conociendo de esta demanda, declare: a) que sus despidos son improcedentes e ilegales de conformidad a la causal invocada y lo establecido en la letra a) del artículo 168 en relación con el artículo 161 del Código del Trabajo, y b) por último, una vez así declarado, se condene a la demandada al pago de la indemnización sanción y a la devolución del dinero descontado ilegalmente por la empresa con cargo al AFC al momento del pago de las indemnizaciones por años de servicios, motivo de esta presentación, más reajustes, intereses y costas. Todo lo anterior, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que pasan a exponer:

A. RESPECTO DE DON ANDRÉS MARIANO STUARDO AMUNÁTEGUI

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

1. ingresó a trabajar con fecha 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017 para CONSORCIO MADERERO S.A., en calidad de MECANICO - SOLDADOR.



2. Para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, percibía una remuneración mensual de \$606.033.-
3. Que, en enero del año 2020. se le comunica el término de su contrato de trabajo, por medio de comunicación escrita al efecto, teniendo como sustento la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.
4. Que, con fecha 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, firmó finiquito, reservándose el derecho a reclamar por la causa invocada y el descuento AFC, tal como se acreditará.
5. Que, con igual fecha, ingresó redamo a la Inspección del Trabajo de Talcahuano NO REALIZANDÓSE COMPARENDO FIJADO CON FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2020, por los hechos públicos y notorios, lo que le obligó a iniciar procedimiento de aplicación general.
6. Ahora bien, los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos para despedirlo, no se ajustan a la realidad, ni menos a derecho, o carecen lisa y llanamente de fundamento legal y de justificación válida, por ende, su despido es improcedente, por lo que por esta vía pretende el 30% de recargo de la Indemnización por años de servicios y el descuento ilegal en relación con el aporte al AFC.

II. PRESTACIONES DEMANDADAS

1. De acuerdo con el fundamento de esta demanda y por resultar su despido del todo improcedente en los términos legales, su ex empleador le adeuda a la fecha de esta presentación, las siguientes partidas, teniendo presente los siguientes antecedentes, a saber:

Fecha de inicio laboral: 15/06/2017

Fecha de término de Contrato: 20/02/2020

Remuneración Base: \$606.033

2. Pago por indemnización sanción (30%), calculado sobre la indemnización por años trabajados (3 años), que se establece en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal, la suma de \$545.430.-, esto es, el 30% de recargo.



3. Además, de la devolución de \$448.104.-, por concepto del aporte AFC del empleador, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal por la causal invocada.

4. El pago de reajustes e intereses según lo establecido en el artículo 173 del Código del Trabajo por determinar durante el juicio, con expresa condenación en costas.

5. Por lo anterior, el total demandado es la suma de \$993.534. - (novecientos noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro peses)

III. CONCLUSIONES

En síntesis, de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente respecto de las solicitudes y prestaciones adeudadas, se puede concluir lo siguiente:

1. Que prestó servicios para la demandada en calidad de MÉCANICO - SOLDADOR, desde 15/06/2017 hasta 20/02/2020.-

2. Que el despido es improcedente e ilegal y así debe declararse, y una vez resuelto eso. Se debe condenar a la demandada al pago de las partidas singularizadas en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS de esta presentación, lo que da un total de \$993.534. - (novecientos noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos), sin perjuicio de los reajustes, intereses y costas del juicio.

B) RESPECTO DE DON CRISTIAN RODRIGO VERGARA NÚÑEZ

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

1. Que, ingresé a trabajar con fecha 9/07/2012 para Consorcio Maderero S.A., en calidad de OPERADOR GRÚA.

2. Que para los efectos del art 172 del Código del Trabajo percibía una remuneración mensual de \$765.402.-

3. Que, en ENERO DEL AÑO 2020 se le comunica el término de su contrato de trabajo por medio de comunicación escrita al efecto, teniendo como sustento la causal establecida en el artículo 161 del Trabajo.



4. Que, con fecha 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, firmó finiquito, reservándose el derecho a reclamar por la causa invocada y el descuento AFC. tal como se acreditará.

5. Que, con igual fecha, ingresó reclamo a la Inspección del Trabajo de Talcahuano NO REALIZANDÓSE COMPARENDO FIJADO CON FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2020 por los hechos públicos y notorios, lo que le obligó a iniciar procedimiento de aplicación general.

6. Ahora bien, los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos para despedirlo, no se ajustan a la realidad, ni menos a derecho, o carecen lisa y llanamente de fundamento legal y de justificación válida, por ende, su despido es improcedente, por lo que por esta vía pretende, el 30% de recargo de la Indemnización por años de servicios y el descuento ilegal en relación con el aporte al AFC.

II. PRESTACIONES DEMANDADAS

1. De acuerdo con el fundamento de esta demanda y por resultar su despido del todo improcedente en los términos legales, su ex empleador me adeuda a la fecha de esta presentación, las siguientes partidas, teniendo presente los siguientes antecedentes a saber:

Fecha de inicio laboral : 09/07/2012

Fecha de término de Contrato : 20/02/2020

Remuneración Base : \$765.402.-

2. Pago por indemnización sanción (30%), calculado sobre la indemnización por años trabajados (8 años), que se establece en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal, la suma de \$1.836.965.-, esto es. el 30% de recargo.

3. Además, de la devolución de 51.446.233.-, por concepto del aporte AFC del empleador, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal por la causal invocada.



4. El pago de reajustes e intereses según lo establecido en el artículo 173 del Código del Trabajo por determinar durante el juicio, con expresa condenación en costas.

5. Por lo anterior, señala que el total demandado es la suma de \$3.283.198.- (tres millones doscientos ochenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos)

III. CONCLUSIONES

En síntesis, de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, respecto de las solicitudes y prestaciones adeudadas, se puede concluir lo siguiente:

1. Que prestó servicios para la demandada en calidad de en calidad de OPERADOR GRÚA, desde 09/07/2012 hasta 20/02/2020.-

2. Que el despido es improcedente e ilegal y así debe declararse, y una vez resuelto eso, el tribunal debe condenar a la demandada al pago de las partidas singularizadas en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS de esta presentación, lo que da un total de \$3.283.198.- (tres millones doscientos ochenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos), sin perjuicio de los reajustes, intereses y costas del juicio.

C) RESPECTO DE DON VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ORELLANA

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

1. Que ingresó a trabajar con fecha 01 DE MARZO DEL AÑO 2016 para CONSORCIO MADERERO S.A., en calidad de OPERADOR DE DESCORTEZADOR.

2. Que, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, percibía una remuneración mensual de \$570.322.-

3. Que, en ENERO DEL AÑO 2020, se le comunica el término de su contrato de trabajo, por medio de comunicación escrita al efecto, teniendo como sustento la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.



4. Que con fecha 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, firmó finiquito, reservándose el derecho a reclamar por la causa invocada y el descuento AFC tal como se acreditará.

5. Que con igual fecha, ingresó reclamo a la Inspección del Trabajo de Talcahuano, NO REALIZANDOSE COMPARENDO FIJADO CON FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2020, por los hechos públicos y notorios, lo que le obligó a iniciar procedimiento de aplicación general.

6. Ahora bien, los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos para despedirlo no se ajustan a la realidad, ni menos a derecho, o carecen lisa y llanamente de fundamento legal y de justificación válida, por ende, su despido es improcedente, por lo que por esta vía pretendo, el 30% de recargo de la indemnización por años de servicios y el descuento ilegal en relación con el aporte al AFC.

I.PRESTACIONES DEMANDADAS

1. De acuerdo con el fundamento de esta demanda y por resultar su despido del todo improcedente en los términos legales, su ex empleador le adeuda a la fecha de esta presentación, las siguientes partidas, teniendo presente los siguientes antecedentes, a saber:

Fecha de inicio laboral : 01/03/2016

Fecha de término de Contrato : 20/02/2020

Remuneración Base : \$570.322.-

2. Pago por indemnización sanción (30%), calculado sobre la indemnización por años trabajados (4 años), que se establece en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal, la suma de \$684.386.-, esto es, el 30% de recargo.

3. Además, de la devolución de \$547.025.-, por concepto del aporte AFC del empleador, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal por la causal invocada.



4. El pago de reajustes e intereses según lo establecido en el artículo 173 del Código del Trabajo por determinar durante el juicio, con expresa condenación en costas.

5. Por lo anterior, podemos señalar que el total demandado es la suma de \$1.231.411.- (un millón doscientos treinta y un mil cuatrocientos once pesos)

II. CONCLUSIONES

En síntesis, de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, respecto de las solicitudes y prestaciones adeudadas, se puede concluir lo siguiente:

1. Que prestó servicios para la demandada en calidad de en calidad de OPERADOR DE DESCORTEZADOR. desde 01/03/2016 hasta 20/02/2020.-

2. Que el despido es improcedente e ilegal y así debe declararse, y una vez resuelto eso, se debe condenar a la demandada al pago de las partidas singularizadas en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS de esta presentación, lo que da un total de \$1.231.411.- (un millón doscientos treinta y un mil cuatrocientos once pesos), sin perjuicio de los reajustes, intereses y costas del juicio.

D. RESPECTO DE DON MANUEL ERNESTO SEPÚLVEDA ALARCÓN

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

1. Que ingresó a trabajar con fecha 01 DE JUNIO DEL AÑO 2010, para CONSORCIO MADERERO S.A., en calidad de MECÁNICO.

2. Que, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, percibía una remuneración mensual de \$636.891.-

3. Que, en ENERO DEL AÑO 2020, se le comunica el término de su contrato de trabajo, por medio de comunicación escrita al efecto, teniendo como sustento la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.

4. Que, con fecha 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, firmé finiquito, reservándose el derecho a reclamar por la causa invocada y el descuento AFC tal como se acreditará.



5. Que, con igual fecha, ingresó reclamo a la Inspección del Trabajo de Talcahuano, NO REALIZANDÓSE COMPARENDO FIJADO CON FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2020, por los hechos públicos y notorios, lo que le obligó a iniciar procedimiento de aplicación general.

6. Ahora bien, los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos para despedirlo, no se ajustan a la realidad, ni menos a derecho o carecen lisa y llanamente de fundamento legal y de justificación válida, por ende, su despido es improcedente, por lo que por esta vía pretende, el 30% de recargo de la indemnización por años de servicio y el descuento ilegal en relación con el aporte al AFC.

II. PRESTACIONES DEMANDADAS

1. De acuerdo con el fundamento de esta demanda y por resultar su despido del todo improcedente en los términos legales, su ex empleador le adeuda a la fecha de esta presentación, las siguientes partidas teniendo presente los siguientes antecedentes, a saber:

Fecha de inicio laboral : 01/06/2010

Fecha de término de Contrato : 20/02/2020

Remuneración Base : \$636.891

2. Pago por indemnización sanción (30%), calculado sobre la indemnización por años trabajados (10 años), que se establece en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal, la suma de \$1.910.673.-, esto es, el 30% de recargo.

3. Además, de la devolución de \$1.551.905.-, por concepto del aporte AFC del empleador, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal por la causal invocada.

4. El pago de reajustes e intereses según lo establecido en el artículo 173 del Código del Trabajo por determinar durante el juicio, con expresa condenación en costas.



5. Por lo anterior, puede señalar que el total demandado es la suma de \$3.462.578.- (tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos)

III. CONCLUSIONES

En síntesis, de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, respecto de las solicitudes y prestaciones adeudadas, se puede concluir lo siguiente:

1. - Que prestó servicios para la demandada en calidad de MECÁNICO, desde 01/06/2010 hasta 20/02/2020.-
2. - Que el despido es improcedente e ilegal y así debe declararse, y una vez resuelto eso, se debe condenar a la demandada al pago de las partidas singularizadas en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS de esta presentación, lo que da un total de \$3.462.578.- (tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos), sin perjuicio de los reajustes, intereses y costas del juicio.

E. RESPECTO DE DON LUIS ALEJANDRO GATICA BRICEÑO.

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

1. Que ingresó a trabajar con fecha 01 DE JULIO DEL AÑO 2016, para CONSORCIO MADERERO S.A., en calidad de RECTIFICADOR DE CUCHILLOS.
2. Que, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, percibía una remuneración mensual de \$567.757.-
3. Que, en ENERO DEL AÑO 2020, se le comunica el término de su contrato de trabajo, por medio de comunicación escrita al efecto, teniendo como sustento la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.
4. Que, con fecha 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, firmó finiquito, reservándose el derecho o reclamar por la causa invocada y el descuento AFC, tal como se acreditará.
5. Que, con igual fecha, ingresó reclamo a la Inspección del Trabajo de Talcahuano, NO REALIZANDOSE COMPARENDO FIJADO CON FECHA 25 DE



MARZO DEL AÑO 2020, por los hechos públicos y notorios, lo que le obligó a iniciar procedimiento de aplicación general.

6. Ahora bien, los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos para despedirme, no se ajustan a la realidad, ni menos a derecho, o carecen lisa y llanamente de fundamento legal y de justificación válida, por ende, mi despido es improcedente, por lo que por esta vía pretende, el 30% de recargo de la indemnización por años de servicios y el descuento ilegal en relación con el aporte al AFC.

II. PRESTACIONES DEMANDADA

1- De acuerdo con el fundamento de esta demanda y por resultar su despido del todo improcedente en los términos legales, su empleador le adeuda a la fecha de esta presentación, las siguientes partidas, teniendo presente los siguientes antecedentes, a saber:

Fecha de inicio laboral : 01/07/2010

Fecha de término de Contrato : 20/02/2020

Remuneración Base : \$567.757

2. Pago por indemnización sanción (30%), calculado sobre la indemnización por años trabajados (4 artos), que se establece en la letra a) del artículo 163 del Código del Trabajo, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal, la suma de \$681.309.-, esto es, el 30% de recargo.

3. Además, de la devolución de \$544.025.-, por concepto el aporte AFC del empleador, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal por la causal invocada.

4. El pago de reajustes e intereses según lo establecido en el artículo 173 del Código del Trabajo por determinar durante el juicio, con expresa condenación en costas.

5. Por lo anterior, se puede señalar que el total demandado es la suma de \$1.225.334.- (un millón doscientos veinticinco mil trescientos treinta y cuatro pesos)

III. CONCLUSIONES



En síntesis, de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, respecto de las solicitudes y prestaciones adeudadas, se puede concluir lo siguiente:

1. Que prestó servicios para la demandada en calidad de en calidad de RECTIFICADOR DE CUCHILLOS, desde 01/07/2016 hasta 20/02/2020.-
2. Que el despido es improcedente e ilegal y así debe declararse, y una vez resuelto eso, se debe condenar a la demandada al pago de las partidas singularizadas en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS de esta presentación, lo que da un total de \$1.225 334.- (un millón doscientos veinticinco mil trescientos treinta y cuatro pesos), sin perjuicio de los reajustes, intereses y costas del juicio.

F. RESPECTO DE DON MARCELO ANDRÉS BECERRA BECERRA.

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

1. Que, ingresó a trabajar con fecha 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, para CONSORCIO MADERERO S.A., en calidad de ASEADOR Y ESTIBADOR DE CARGA.
2. Que, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, percibía una remuneración mensual de \$440.972.-
3. Que, en ENERO DEL AÑO 2020 se le comunica el término de su contrato de trabajo, por medio de comunicación escrita al efecto, teniendo como sustento la causa establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.
4. Que, con fecha 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, firmó finiquito, reservándose el derecho a reclamar por la causa invocada y el descuento AFC tal como se acreditará.
5. Que, con igual fecha, ingresó reclamo a la Inspección del Trabajo de Talcahuano, NO REALIZANDOSE COMPARENDO FIJADO CON FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2020, por los hechos públicos y notorios, lo que le obligó a iniciar procedimiento de aplicación general.
6. Ahora bien, los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos para despedirlo, no se ajustan a la realidad ni menos a derecho, o carecen lisa y



llanamente de fundamento legal y de justificación válida, por ende, su despido es improcedente, por lo que por esta vía pretende, el 30% de recargo de la Indemnización por años de servicios y el descuento ilegal en relación con el aporte al AFC.

II. PRESTACIONES DEMANDADAS

1. -De acuerdo con el fundamento de esta demanda y por resultar su despido del todo improcedente en los términos legales, su ex empleador me adeuda a la fecha de esta presentación, las siguientes partidas, teniendo presente los siguientes antecedentes, a saber:

Fecha de inicio laboral 6/10/2016

Fecha de término de contrato 20/02/2020

Remuneración base \$440.972.-

2. Pago por indemnización sanción (30%), calculado sobre la indemnización por años trabajados (3 años), que se establece en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal, la suma de \$396.875.-, esto es, el 30% de recargo.

3. Además, de la devolución de \$378.810.-, por concepto del aporte AFC del empleador, por resultar el despido del todo improcedente e ilegal por la causal invocada.

4. El pago de reajustes e intereses según lo establecido en el artículo 173 del Código del Trabajo por determinar durante el JUICIO, con expresa condenación en costas.

4. - Por lo anterior, podemos señalar que el total demandado es la suma de \$775.685.- (setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos)

III. CONCLUSIONES

En síntesis, de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, respecto de las solicitudes y prestaciones adeudadas, se puede concluir lo siguiente:

1. Que prestó servicios para la demandada en calidad de ASEADOR Y ESTIBADOR DE CARGA, desde 06/10/2016 hasta 20/02/2020.-



2. Que el despido es improcedente e ilegal y así debe declararse y una vez resuelto eso, se debe condenar a la demandada al pago de las partidas singularizadas en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS de esta presentación, lo que da un total de \$775 685.- (setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos), sin perjuicio de los reajustes, intereses y costas del juicio.

G. RESPECTO DE DON RAÚL ARNOLDO MELLA PARRA

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES

1. Que, ingresó a trabajar con fecha 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, para CONSORCIO MADERERO S.A., en calidad de RECTIFICADOR DE CUCHILLOS.

2. Que, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, percibía una remuneración mensual de \$574.537.-

3. Que, en ENERO DEL AÑO 2020, se le comunica el término de mi contrato de trabajo, por medio de comunicación escrita al efecto, teniendo como sustento la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.

4. Que, con fecha 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, firmé finiquito, reservándome el derecho a reclamar por la causa invocada y el descuento AFC. tal como se acreditará.

5. Que con igual fecha, ingresó redamo a la Inspección del Trabajo de Talcahuano. NO REALIZANDÓSE COMPARENDO FIJADO CON FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2020, por los hechos públicos y notorios, lo que le obligó a iniciar procedimiento de aplicación general.

6. Ahora bien, los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos para despedirle, no se ajustan a la realidad, ni menos a derecho, o carecen lisa y llanamente de fundamento legal y de justificación válida, por ende, su despido es improcedente, por lo que por esta vía pretendo, el 30% de recargo de la Indemnización por años de servicios y el descuento ilegal en relación con el aporte al AFC.

II PRESTACIONES DEMANDADAS



1. De acuerdo con el fundamento de esta demanda y por resultar su despido del todo improcedente en los términos legales, su ex empleador le adeuda a la fecha de esta presentación, las siguientes partidas, teniendo presente los siguientes antecedentes, a saber:

Fecha de inicio laboral 11/02/2014

Fecha de término de Contrato 20/02/2020

Remuneración Base \$574.5537.-

2. Pago por indemnización sanción (30%), calculado sobre la indemnización por años), que se establece en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, por resultar e improcedente e ilegal, la suma de \$1.034.167.-, esto es. el 30% de recargo.

3. Además, de la devolución de \$756.956.-, por concepto del aporte AFC del empleador, el despido del todo improcedente e ilegal por la causal invocada.

4. El pago de reajustes e intereses según lo establecido en el artículo 173 del Código del determinar durante el juicio, con expresa condenación en costas.

5. Por lo anterior, podemos señalar que el total demandado es la suma de \$1.791.123. setecientos noventa y un mil ciento veintitrés pesos.

III. CONCLUSIONES

En síntesis, de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, respecto de las solicitudes y prestaciones adeudadas, se puede concluir lo siguiente:

1. Que prestó servicios para la demandada en calidad de en calidad de ASEADOR Y ESTIBADOR DE CARGA, desde 06/10/2016 hasta 20/02/2020.-

2. Que el despido es improcedente e ilegal y así debe declararse, y una vez resuelto eso, se debe condenar a la demandada al pago de las partidas singularizadas en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS de esta presentación, lo que da un total de \$1.791.123.- (un millón setecientos noventa y un mil ciento veintitrés pesos), sin perjuicio de los reajustes, intereses y costas del juicio.



En mérito de lo expuesto, y disposiciones legales que invocan solicitan tener por interpuesta demanda laboral en procedimiento de aplicación general, en contra de CONSORCIO MADERERO S.A., representada legalmente por don Luís Carretero Martínez, ambos ya individualizados, para que US. conociendo de esta demanda, declare que nuestros despidos son del todo improcedentes e ilegales, de conformidad con la causal invocada y la letra a) del artículo 168 en relación con el artículo 161 del Código del Trabajo, y por esa vía, se obligue a la demandada a pagar la indemnización sanción establecida en Código del trabajo, y para que se condene a la misma, que nos haga devolución del monto del aporte del empleador al fondo de cesantía descontado arbitrariamente e ilegalmente de nuestros finiquitos, conforme a los valores señalados en el apartado PRESTACIONES DEMANDADAS respecto de cada uno de los comparecientes a esta presentación, que se dan por reproducidas una a una en esta parte petitoria, la que alcanza a un total de:

\$993.524. - (novecientos noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos)

RESPECTO DE DON ANDRES MARIANO STUARDO AMUNÁTEGUI

\$3.283.198.- (tres millones doscientos ochenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos) RESPECTO DE DON CRISTIAN RODRIGO VERGARA NÚÑEZ

\$1.231.411.- (un millón doscientos treinta y un mil cuatrocientos once pesos)

RESPECTO DE DON VICTOR MANUEL MUÑOZ ORELLANA

\$3.462.578.- (tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos) RESPECTO DE DON MANUEL ERNESTO SEPÚLVEDA ALARCÓN

\$1.225.334.- (un millón doscientos veinticinco mil trescientos treinta y cuatro pesos) RESPECTO DE DON LUIS ALEJANDRO GATICA BRICEÑO

\$775.685.- (setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos)

RESPECTO DE DON MARCELO ANDRES BECERRA BECERRA

\$1.791.123.- (un millón setecientos noventa y un mil ciento veintitrés pesos)

RESPECTO DE DON RAUL ARNOLDO MELLA PARRA

O la suma que el determine conforme al mérito de autos, con sus correspondientes recargos, reajustes e intereses legales, todo ello con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que FRANCISCO JOSÉ ARELLANO VILLASECA, abogado, con domicilio en calle Lautaro N° 267, oficina 23 de la comuna de Los Ángeles, en representación, según se acreditará, de CONSORCIO MADERERO S.A., demandado, ya individualizado, en Procedimiento de Aplicación General, RIT O-567-2020, caratulado “Sepúlveda con Consorcio Maderero S.A.”, viene en contestar demanda por despido improcedente y cobro de prestaciones laborales, interpuesta en contra de su representada, solicitando desde ya, el rechazo de la misma en todas sus partes, con expresa condena en costas, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que expone:

Los demandantes, don Andrés Mariano Stuardo Amunátegui, don Cristián Rodrigo Vergara Núñez, don Víctor Manuel Muñoz Orellana, don Manuel Ernesto Sepúlveda Alarcón, don Luis Alejandro Gatica Briceño, don Marcelo Andrés Becerra Becerra y don Raúl Arnoldo Mella Parra, prestaron servicios a su representada, entre las fechas y en las condiciones que se indican en la demanda. Con fecha 20 de febrero del año en curso, su representada se ve en la obligación de poner término a la relación laboral que mantenía con los demandantes, mediante la entrega de una carta de aviso de término de contrato, en la que se invoca como causal de derecho del despido, la contenida en el inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo, esta es, “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores”.

Dicha decisión obedeció a un proceso de reestructuración interna de la empresa, que ha hecho necesaria la racionalización de funciones y cargos.

Que su representada es una empresa exportadora de madera con áreas de negocio en el aserrío, secado, remanufactura y exportación de madera de pino



para el armado y reparación de pallets en los mercados de Estados Unidos, México, Costa Rica y Ecuador.

Que desde el año 2017, las tensiones comerciales generadas entre Estados Unidos y China han provocado una baja importante en el comercio internacional, proyectándose recesiones a nivel mundial en el corto plazo, lo que se ha agravado aún más dada la contingencia provocada por el brote de la pandemia de Covid-19 en el mundo.

Por lo anterior, las necesidades de pallets a nivel mundial han venido disminuyendo, afectando tanto a sus volúmenes como a los precios de venta, los que han caído abruptamente, afectando de la misma forma a mi representada.

Dadas estas desfavorables condiciones de mercado, y con el fin de no poner en riesgo la continuidad de la empresa, Consorcio Maderero S.A. ha debido tomar la lamentable decisión de cerrar la Planta San Vicente, ubicada en Gran Bretaña N° 1325 de la comuna de Talcahuano, en la que se desempeñaban los demandantes, haciendo inevitable su desvinculación.

Por lo anterior, con fecha 29 de diciembre de 2019, Consorcio Maderero S.A. comunica a San Vicente Terminal Internacional S.A., su intención no renovar el contrato de servicios y de poner término al contrato de arrendamiento que las vinculaba, comprometiéndose a hacer entrega del inmueble en que funcionaba la Planta, el día 15 de febrero de este año.

Por otra parte, con fecha 29 de mayo de 2020, se solicita la nulidad de la patente con la que funcionaba la Planta a la oficina de rentas y patentes de la Municipalidad de Talcahuano.

De lo expuesto, se concluye claramente que el despido de los demandantes se encuentra plenamente justificado, tanto en los hechos como en el derecho, al ser las razones de su desvinculación de carácter objetivo, graves y permanentes, las que como se ha dicho, consisten en los cambios negativos que ha experimentado el mercado de la madera.

En efecto, el inciso primero del artículo 161 Código del Trabajo, establece que “el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las



necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores”.

La Corte Suprema, ha entendido uniformemente que el artículo recién citado configura una causal objetiva de terminación de la relación laboral, por lo que para que pueda ser invocada, es necesaria la concurrencia de ciertas circunstancias que la hagan procedente, sin que pueda depender de la mera voluntad del empleador ni de alguna conducta del trabajador (Rol 5447-2008, Rol 3740-2008, Rol 5.000–2014).

Así, la mencionada causal dice relación exclusivamente con circunstancias que rodean la actividad económica de que se trata, y para su configuración es necesario que dichas circunstancias no emanen de la sola voluntad o responsabilidad de la empresa. Además, dichas circunstancias deben ser graves, exigiéndose que el impacto económico sea relevante, esto es, deben ser de tal magnitud que provoquen en el empleador la necesidad de despedir a uno o más de sus trabajadores; y permanentes, es decir, con una permanencia en el tiempo que no sea transitoria ni subsanable (v. gr. Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 107-2007, Rol 555-2007; Corte de Apelaciones de Chillán, Rol 108-2017; Corte Suprema, Rol 5692-2007, Rol 5000-2014).

Supuestos que se cumplen a cabalidad en el caso de autos, dado que los despidos son consecuencia del cambio negativo que ha experimentado el mercado de la madera a nivel global, lo que evidentemente no depende de la voluntad de mi representada (objetivas), se han sostenido por largo tiempo, desde principios de 2018, y hasta la fecha dichas condiciones no han mejorado ni existen proyecciones de mejoría (permanentes), y han provocado bajas en las ventas de productos, lo que evidentemente trae aparejado una baja en los ingresos de la empresa, haciendo imprescindible proceder a la desvinculación de varios de sus trabajadores (graves).

De esta forma, cumpliéndose los requisitos exigidos por el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, los despidos de los demandantes deben considerarse ajustados a Derecho, por lo que no se provoca el nacimiento de la obligación de pagar los conceptos solicitados en la demanda.

En efecto, es absolutamente improcedente el cobro del incremento legal establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, así como tampoco procede la restitución del descuento a la indemnización por años de servicios del aporte efectuado por mi representada a la cuenta individual por cesantía de los demandantes.

El artículo 13 de la Ley N° 19.728 preceptúa que “Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicio prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, calculada sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicara ésta última. Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado puede hacer retiros en la forma que señala el artículo 15”.

De acuerdo con la norma citada, su representada se encuentra facultada para imputar a la indemnización por años de servicio, aquella parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía que corresponde a las cotizaciones aportadas por ella, más su rentabilidad y deducidos los costos de administración que fueren pertinentes.

Sin perjuicio que los despidos de los demandantes se encuentran plenamente justificados y ajustados a Derecho, cabe hacer presente, que la norma mencionada no establece, en parte alguna, que dicho descuento se encuentre supeditado a que la causal del despido sea justificada mediante una calificación que pueda efectuar un Tribunal en forma posterior, así como tampoco establece la



posibilidad de una futura restitución del descuento, en caso que la causal sea declarada como injustificada posteriormente por un Tribunal.

Entonces, y en aplicación del principio “donde la ley no distingue no le es dado al interprete distinguir”, aun cuando los despidos fueren declarados injustificados, sería igualmente improcedente ordenar la restitución del descuento a la indemnización por años de servicio del aporte efectuado por mi representada a la cuenta individual por cesantía de los demandantes, lo que, además, concuerda plenamente con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 52 de la misma ley que establece “Si el tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13”.

Así también lo ha entendido la jurisprudencia, en sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos Rol 117-2017, que establece: “Quinto: (...) ... Por lo tanto, la calificación judicial de injustificado de un despido por necesidades de la empresa tiene como consecuencia económica la obligación de pagar el incremento legal respectivo (30%), única sanción que la ley ha previsto en 14 la materia, pero no incide ni es obstáculo para la imputación reclamada. Justificado o no lo cierto es que el contrato de trabajo terminó por la causal de necesidades de la empresa. Por consiguiente, la declaración judicial aludida no es impedimento para efectuar la imputación respectiva. Al ser así, no existe el error de derecho que se acusa en el recurso. Lejos de ello, se ha hecho en la sentencia recurrida una acertada aplicación de la normativa atinente al asunto”.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de esta pretensión, toda vez que resulta improcedente a la luz de la Ley sobre Seguro de Desempleo y del espíritu de la Ley N° 19.728.

En conclusión, contrariamente a lo que se sostiene en la demanda, los fundamentos esgrimidos para los despidos de cada uno de los demandantes, son absolutamente justificados, ajustándose plenamente a la realidad y al Derecho, siendo, por ende, procedentes, por lo que no corresponde el pago del incremento legal establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo ni la



restitución del descuento a la indemnización por años de servicios del aporte efectuado por mi representada a la cuenta individual por cesantía de los demandantes.

Por último, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, al tribunal tener presente que esta parte asume una defensa negativa, controvirtiendo todo aquello que no haya sido reconocido expresamente en su presentación.

En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en las disposiciones legales que invoca, tener por contestada, en los términos planteados, la demanda interpuesta en contra de representada, acoja las defensas opuestas, ya sea todas o alguna(s) de ellas, y en definitiva, sea rechace en todas sus partes la demanda, o en lo que el tribunal estime pertinente, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, llamadas las partes a conciliación esta no se produce y se establecieron los siguientes hechos no controvertidos:

- 1.- Que los actores ingresaron a prestar servicios para la demandada en la fecha señalada en su presentación.
- 2.- Que la última remuneración mensual de los actores, para los efectos del artículo 172, ascendía a los montos señalados en su demanda.
- 3.- En el mes de enero del año 2020, se puso término al contrato de trabajo de los actores por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo.
- 4.- Que por concepto de aporte del empleador a la AFC, se le descontaron a los trabajadores los montos señalados en su demanda.

CUARTO: Que se fijó como hecho controvertido el siguiente:

- 1.- Hechos contenidos en la carta de despido, efectividad de haber concurrido estos.

QUINTO: Que la parte demandada ofreció y rindió los siguientes medios de prueba:

I.- Documental:

1. Contratos de trabajo celebrado entre todos los demandantes y la representada.



2. Cartas de aviso de término de contrato de 20 de enero de 2020 de cada uno de los demandantes.
3. Comprobantes de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo emitido por la Dirección del Trabajo por cada uno de los demandantes.
4. Certificado de saldo aporte empleador al seguro de cesantía para imputar a Indemnización por años de servicio, emitido por AFC Chile, de cada uno de los demandantes.
5. Finiquitos de contrato de trabajo ratificados por cada uno de los demandantes.
6. Copia de Aviso de término de contratos de prestación de servicio y de arrendamiento de cancha de acopio en que funcionaba la Planta, en que se desempeñaban los demandantes, emitida por la representada y dirigida a San Vicente Terminal Internacional S.A.
7. Solicitud y control de patentes de trámite de nulidad de patente de Planta San Vicente, efectuada a Municipalidad de Talcahuano.
8. Copia de cartas de despido de trabajadores que se desempeñaban en la misma Planta que los demandantes: 1. Gustavo Alejandro Aburto Cáceres, 2. Pablo Mauricio Aravena Contreras, 3. Leonardo Alfonso Campos Jara, 4. Alan Neftalí Contreras Loyola, 5. Baldemiro Enrique Flores Araya, 6. José Albino Gómez Uribe, 7. Segundo Cecilio Inostroza Grandón, 8. Claudio Patricio Inzunza Concha, 9. Juvenal Alamiro Núñez Muñoz, 10. Mateo Andrés Quintana Ortiz, 11. Julio del Carmen Sánchez Canales, 12. Juan Parra Franco, 13. Yenny Andrea Sáez Sánchez.
9. Finiquitos de trabajadores que se desempeñaban en la misma Planta que los demandantes: 1. Gustavo Alejandro Aburto Cáceres, 2. Pablo Mauricio Aravena Contreras, 3. Leonardo Alfonso Campos Jara, 4. Alan Neftalí Contreras Loyola, 5. Baldemiro Enrique Flores Araya, 6. José Albino Gómez Uribe, 7. Segundo Cecilio Inostroza Grandón, 8. Claudio Patricio Inzunza Concha, 9. Juvenal Alamiro Núñez Muñoz, 10. Mateo Andrés Quintana Ortiz, 11. Julio del Carmen Sánchez Canales, 12. Yenny Andrea Sáez Sánchez.



10. Nómina de finiquitos suscritos por ex trabajadores desvinculados entre febrero de 2018 y junio de 2020.
11. Copia de carta enviada por International Woodchip Corporation Pte. Ltd. a la representada con fecha 02 de abril de 2020. (en inglés)
12. Copia de correo electrónico enviado por Hokuetsu Corporation a la representada el día 15 de abril de 2020, dando aviso de la suspensión de los embarques. (en inglés)
13. Copia de correo electrónico enviado por OCM a la representada el día 15 de mayo de 2020, dando aviso de la baja en los volúmenes de venta. (en inglés)
14. Finiquitos suscritos por la representada durante el año 2018.
15. Finiquitos suscritos por la representada durante el año 2019.
16. Finiquitos suscritos por la representada entre enero y junio de 2020.

II.- Confesional: Absuelven posiciones los demandantes

1. Luis Alejandro Gatica Briceño, cedula de identidad N°12.699.856-2
2. Raúl Arnoldo Mella Parra, cédula de identidad N°10.863.047-7
3. Cristián Rodrigo Vergara Núñez, cedula de identidad N°17.454.340-2
4. Marcelo Andrés Becerra Becerra, cedula de identidad N°16.897.727-1
5. Andrés Mariano Stuardo Amunátegui, cedula de identidad N°8.722.089-3
6. Víctor Manuel Muñoz Orellana, cedula de identidad N°7.806.687-3.

La parte demandada solicita se haga efectivo el apercibimiento solicitado, por no comparece a absolver posiciones Manuel Ernesto Sepúlveda Alarcón, el tribunal deja su resolución para la sentencia definitiva.

III.- Testimonial:

1. Flavio Felipe Díaz Cabiol.
2. Luis Cáceres Alvial.

SEXTO: Por su parte, la demandante rindió la siguiente prueba:

I.- Documental:

1. Finiquitos de todos los demandantes Andrés Mariano Stuardo Amunátegui; Cristian Rodrigo Vergara Núñez; Víctor Manuel Muñoz Orellana; Manuel Ernesto



Sepúlveda Alarcón; Luís Alejandro Gatica Briceño; Marcelo Andrés Becerra Becerra; Y Raúl Arnoldo Mella Parra donde constan las reservas de derechos.

2. Reclamos realizados ante la ICT de Talcahuano de todos los demandantes Andrés Mariano Stuardo Amunátegui; Cristian Rodrigo Vergara Núñez; Víctor Manuel Muñoz Orellana; Manuel Ernesto Sepúlveda Alarcón; Luís Alejandro Gatica Briceño; Marcelo Andrés Becerra Becerra; y Raúl Arnoldo Mella Parra.

Tribunal provee: Téngase por incorporada la prueba documental.

II.- Confesional:

Absuelve posiciones el representante legal de la demandada don Luís Carretero Martínez.

III.- Testimonial: Renuncia.

SÉPTIMO: Que de acuerdo al mérito de las presentaciones de las partes, lo obrado en la audiencia preparatoria no se encuentra controvertido que los actores ingresaron a prestar servicios para la demandada en la fecha señalada en su presentación; que la última remuneración mensual de los actores, para los efectos del artículo 172, ascendía a los montos señalados en su demanda; que en el mes de enero del año 2020, se puso término al contrato de trabajo de los actores por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo; y que por concepto de aporte del empleador a la AFC, se le descontaron a los trabajadores los montos señalados en su demanda. Además, ello resulta corroborado de acuerdo al mérito de la prueba documental rendida tanto pro la parte demandada como demandantes.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la controversia queda reducida a la efectividad de haber ocurrido los hechos contenidos en la carta de despido.

NOVENO: Que, respecto a la acción de despido improcedente, la cuestión radica en determinar si el despido fundado en la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, se ajusta a derecho. Así, dicha causal de despido señala: “Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en



la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168”.

Por su parte, en cuanto a las formalidades del despido, el artículo 162 prescribe: “Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 o 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda”, y el artículo 454 N°1 inciso segundo del Código del Trabajo añade “en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.”

En ese sentido, esta sentenciadora ha llegado a la convicción que la carta de despido incorporada en autos no satisface el estándar exigido por el legislador para fundar el despido. En efecto, respecto a la exigencia en cuanto a la fundamentación fáctica del despido, el legislador fue enfático en señalar que se deben indicar los hechos en que se funda la causal, lo que se ve ratificado por aquella regla antes citada que establece que en el juicio de despido solo pueden acreditarse aquellos hechos señalados específicamente en la comunicación de despido y no otros. Dichas exigencias tienen por objetivo que el trabajador conozca con plenitud las razones por las cuales fue desvinculado, a fin de no quedar en estado de indefensión, pudiendo ofrecer, objetar e incorporar las pruebas tendientes a refutar dichos hechos señalados específicamente en la carta de despido.

En efecto, la comunicación de despido incorporada en estos autos se limita a señalar lo siguiente desde el punto de vista fáctico: “Esta decisión se funda en la necesidad de hacer una reestructuración de la planta de personal de la



sección en que Ud. ha prestado servicios”. Claramente, la redacción de la comunicación de despido resulta del todo insuficiente, puesto que la misma carece de los elementos mínimos que permitan a al trabajador, al momento de su desvinculación, conocer las razones que fundan su despido. En primer término, no señala las circunstancias en que se funda la necesidad de hacer una reestructuración y racionalización, ni aporta elementos que permitan determinar en qué han consistido estos procesos de reestructuración y racionalización, ni los antecedentes que se tuvieron a la vista para su realización, lo que deja a la demandante en indefensión al no conocer las motivaciones reales de su salida, siendo extemporáneo el intento de la demandada de pretender justificar las razones con ocasión de este juicio.

DÉCIMO: Que, sobre el particular la Excelentísima Corte Suprema ha indicado que: “5° Que dicha exigencia se impuso para que quedara establecido, previamente, el presupuesto fáctico sobre el cual debe recaer la prueba que ha de rendir el empleador, esto es, las circunstancias que indicó en la comunicación de desvinculación, léase conducta, comportamiento o situaciones que configuraron la o las causales de término de contrato de trabajo invocadas, y así evitar su corrección o complementación a posterioridad, en el transcurso del juicio; situación, esta última, que dejaba al trabajador en estado de indefensión, porque, en definitiva, al no tener convicción respecto de la causa que motivó su separación de la fuente laboral no estaba en condiciones de defenderse, ofreciendo prueba para rebatirla. Entonces, es precisamente por la relevancia que tiene la misiva a que se alude, que la norma que la consagra ordena que debe ser notificada al trabajador, personalmente o mediante su envío por carta certificada al domicilio registrado en el contrato, lo que ha de perfeccionarse dentro de tercero día hábil siguiente a la cesación, con copia a la Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo;

6° Que, en esas condiciones, de la interpretación de las normas que reglamentan el asunto se ha de colegir que si el empleador pretende despedir a un trabajador debe indicar en la carta de despido tanto la causal legal como los



hechos en que se funda, los que tienen que ser específicos y no genéricos, pues la última norma citada, que regula cómo debe rendirse la prueba en los juicios sobre despido, señala que debe hacerlo, en primer lugar, el demandado, quien ha de acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos 1 y 4 del artículo 162, sin que pueda alegar hechos distintos como justificativos del despido; la que debe noticiar al trabajador, personalmente o mediante su envío por carta certificada al domicilio que registró en el contrato, dentro de tercero día hábil siguiente a la cesación, con copia a la Inspección del Trabajo, en igual plazo;

7° Que, así, el trabajador podrá reclamar ante el juzgado competente la decisión del empleador solicitando que se la declare indebida, injustificada o improcedente y se lo condene al pago de las indemnizaciones legales que sean procedentes, lo que se vería entorpecido si desconoce los presupuestos reales y precisos que se tuvieron en consideración para desvincularlo; dificultad que experimentaría si se concluye que la omisión en el envío de la comunicación escrita o su ausencia no lo deja en la indefensión y que es suficiente que haya tomado conocimiento de los hechos por otra vía, en el caso concreto, en la Inspección del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, resulta que una manifestación del derecho a un real y justo procedimiento se traduce, en el caso concreto -trabajador desvinculado por la decisión unilateral del empleador-, en que se suministre de manera eficaz todos los antecedentes que motivaron el despido para poder preparar la defensa y convencer al juzgador que la causal esgrimida es injustificada, indebida o improcedente; oportunidad que es aquella en que se le comunica el despido por la carta o aviso a que se ha hecho referencia;

8° Que, en ese contexto, el demandado en la etapa procesal correspondiente deberá acreditar la efectividad de los hechos de que da cuenta la misiva a que se ha aludido, correspondiéndole al demandante contradecirlos con los medios de prueba recabados, lo que podrá hacer en la medida que los hechos que sirvieron de fundamento a la decisión que impugna los haya conocido de manera íntegra y oportuna a través de aquélla. Los datos que el demandado puede aportar en el



escrito por el cual contesta la demanda son insuficientes, pues es un trámite que debe evacuarse con una antelación de cinco días a la celebración de la audiencia preparatoria y que está destinada a que las partes ofrezcan los medios probatorios que estimen adecuados, lo que se traduciría en una disminución injustificada del término que el trabajador tiene para recabarlos;" (Excelentísima Corte suprema, fallo de 17 de enero del año 2017, Rol 47.874-2016)

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente en cuanto a las deficiencias de la carta, se debe considerar que el objeto de la litis consiste en determinar la veracidad de los hechos descritos en las comunicaciones de despido de 20 de enero de 2020, en que se les informa el hecho, por cuanto la cuestión fáctica está circunscrita por lo dicho en esa comunicación conforme a los límites que impone el artículo 454, número 1, inciso segundo el Código del Trabajo. "necesidades de la empresa, establecimiento o servicio" basado en un proceso de reestructuración interna de la compañía, así como a la racionalización de funciones y cargos. De tal suerte que las alegaciones agregadas a la contestación de la demanda en cuanto a explicar que las necesidades de pallets a nivel mundial han venido disminuyendo, afectando tanto sus volúmenes como precios de venta, los que han caído abruptamente y que por las desfavorables condiciones de mercado, han debido cerrar la planta San Vicente, así como al decisión de no renovar el contrato de servicios y pone término al contrato de arrendamiento con San Vicente Terminal Internacional S.A., no pueden ser consideradas para los efectos de la litis, por cuanto, tal como se ha indicado no fue comprendido dentro de los hechos de la carta de despido.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo consignado en los considerandos anteriores y en orden a determinar la correcta aplicación de la causal fundada en un proceso de reestructuración interna de la compañía, así como la racionalización de funciones y cargos, se debe tener presente que corresponde a la demandada acreditar dicho supuesto de hecho.

De esta manera, en orden a probar las razones en virtud de las cuales el demandado pretende justificar el despido de la actora, la demandada incorporó la



prueba documental signada en el numeral QUINTO de este fallo desde los numerales 1 al 16. Sin embargo, se trata de instrumentos que son impertinentes para acreditar la causal invocada, por cuanto dicen relación más bien con las condiciones en que se les contrató, la forma en que se desarrollaron las relaciones laborales de los actores, los despidos, avisos de despido, finiquitos y saldos de aporte del empleador al seguro de cesantía. Además, se agregan cartas de despido y finiquitos de otros trabajadores, también finiquitos de otros años distintos al del despido de los demandantes, nóminas de finiquitados, solicitud y control de patentes de trámite de nulidad, que no periten acreditar el vago e impreciso supuesto de hecho referido en la carta de despido. También, se incorpora una carta y correo electrónico en inglés, las que no fueron acompañadas con su debida traducción, y que fueron objetadas en juicio, razón por la cual no se les asignará valor probatorio. Finalmente, se incorpora una solicitud y control de patentes de trámite de nulidad, antecedentes que tampoco dicen relación con los hechos de la carta y no permiten contribuir a la acreditación de la causal.

En cuanto a la prueba testimonial consistente en la declaración de Flavio Felipe Díaz Cabiol y Luis Magin Cáceres Alvial, tampoco permiten acreditar la justificación de la causal de despido invocada. En efecto, Díaz Cabiol plantea que se cerró la planta, no se podía seguir con la planta en ese puerto, para la cual coincidieron una serie de factores, entre ellos la crisis económica desata una guerra comercial entre estados Unidos y china y en el plano local, la imposibilidad que el Puerto San Vicente les siguiera prestando servicios de embarque, lo que obligó cerrar la planta. Agrega que se cerró la planta y se le avisó al personal con 30 días de anticipación. Da cuenta de las plantas de la empresa, agregando que la gente de la planta de Coronel sigue trabajado ahí y que ningún trabajador de San Vicente fue a trabajar a Coronel, que se les ofreció pero ninguno quizá. Por su parte, el testigo Cáceres Alvial, también señala que los demandantes fueron desvinculados porque la planta de san Vicente se cerraba y le consta que la planta se cerró porque él hizo los trámites para dar de baja la patente en la Municipalidad. En cuanto a los motivos indica que hubo una merma en su



producto a nivel internacional, sus clientes bajaron su intención de compra, hubo cartas, se debía reajustar el precio, el mercado estaba muy difícil, era un tema competitivo.

El cierre de la planta y sus razones fue explicado en detalle por Luis Carretero Martínez habla de la situación económica, la guerra comercial entre China y estados Unidos, el COVID, la merma en la producción y el cierre de la planta.

Sin embargo, si bien las declaraciones expuestas coinciden que los despidos de los trabajadores se fundaron en el cierre de la planta de San Vicente, lo que se produjo por las situaciones económicas que ellos plantean, lo cierto es que nada de ello fue referido en las cartas de despido. En efecto, del análisis de las cartas de despido entregadas un mes antes de la desvinculación, no señalan las razones indicadas en juicio y en la contestación de la demanda, de manera que no resulta efectivo lo indicado por el testigo Díaz Cabiol en orden a que esto se les informó 30 días antes a los trabajadores. Por otra parte, el referido testigo, desde ya genera dudas sobre la pertinencia de la causal, puesto que señala expresamente que a los trabajadores se les dio la posibilidad de trabajar en la planta de Coronel, pero que no aceptaron, de manera que habrían existido alternativas diversas a la desvinculación, lo que resta fuerza a la procedencia de la causa.

Ahora bien, para acreditar su posición la parte demandada llamó a absolver posiciones a los demandantes, y basta ver sus declaraciones para constatar que ellos no tenían claridad que el despido se fundaba en el cierre de la planta ni de las razones de ello. Algunos se enteraron con posterioridad al despido y otros no tenían conocimiento sobre lo ocurrido a la planta, además se da cuenta que habrían continuado ciertas labores y cierto personal trabajando. En efecto, si bien ellos indican que la planta se cerró, no existe uniformidad en sus respuestas.

Así, Sepúlveda Alarcón indica que de repente le avisaron que hasta ahí no más llegaban y fueron despedidos. La planta se cerró, no había producción ni embarque. Mella Parra refiere que recibió la carta de despido, que se le dijo que la planta iba a cerrar porque no había producción, pero luego se les dijo que la planta iba a seguir funcionando, supone que tenía que desarmarse, hace un par de



meses atrás la desarmaron. Después del despido tiene entendido que la planta siguió picando madera y la estuvieron desarmando. Al final despidieron a todos los trabajadores, quedó gente de la administración trabajando. Vergara Núñez, refiere que le llegó la carta, que fueron despedidos, pero quedaron trabajando más personas y según la carta era por mejoras y cambios en la producción. Después del despido la planta siguió funcionando y se desarmó como 8 o 9 meses después del despido. Becerra, fue despedido por el artículo que copiaron y pegaron, no les explicaron por qué. Se dijo que bajaron las producciones, subieron el arriendo, se quieran ir. La planta se cerró hace como 6 o 7 meses, lo que sabe porque vive a metros de la planta y luego de su despido quedó gente trabajado, administrativos y gente nueva que contrataron. Quedó gente picando y desarmando la planta. Stuardo Amunátegui refiere que la planta tenía una excelente producción, no sabe por qué de repente le llegó una carta en que indicaron que iba a ser un mejoramiento de la planta. Luego de la carta de despido tuvieron que trabajar el mes de aviso, no sabe si la planta fue cerrada o si fue estragada al Puerto de San Vicente. Muñoz Orellana indica que todos los colegas que trabajaban en ese instante recibieron la carta y después no sabe si la planta siguió funcionando, al recibir la carta les dijeron que iban a parar la planta para modernizarla y cambiar el sistema, hacerlo más moderno, eso fue lo que él escuchó y les dijeron sus jefes.

DÉCIMO TERCERO: Que, ahora bien, aun obviando la deficiencia formal de la carta ya referida, lo cierto es que la afectación de volúmenes y precios, las condiciones desfavorables del mercado y el riesgo en la continuidad de la empresa, que habrían llevado al cierre de la planta, solo sostenidas en la contestación de la demanda, no puede ser acreditadas únicamente con el solo mérito de asertos de los testigos referidos o absoluciones de posiciones de los actores, sin que se acompañen otros antecedentes que corroboren idóneos y avalen sus dichos.

El despido por la causal de necesidades de la empresa, debe estar asociado por regla general, a una causa que no sea la sola voluntad unilateral y discrecional del



empleador, por lo que debe fundarse en hechos objetivos que hagan inevitable la separación de uno a más trabajadores, y que digan relación con aspectos técnicos o un proceso de racionalización estructurado y debidamente fundado en razones económicas, como ser bajas en la productividad, o cambios en las condiciones de mercado.

Esto último resulta de suma importancia si se quiere demostrar la existencia de un proceso objetivo que permita descartar cualquier tipo de arbitrariedad en las decisiones. Así, normalmente la situación económica de una empresa se ve reflejada a través de elementos contables o técnicos, referidos al origen económico que subyace en la causal. Aplicando lo expuesto al presten caso, no se han aportado medios de prueba técnicos y económicos, cuya idoneidad sea suficiente para dar cuenta del estado de los negocios de la empresa, lo que hace imposible identificar el posible origen de la restructuración y racionalización invocada y por lo mismo, impide configurar la causal.

DÉCIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de los defectos de la comunicación, que obstan a que esta cumpla con las formalidades del despido, de igual modo en los hechos las razones esgrimidas en la contestación de la demanda y que habrían motivado al empleador a la desvinculación de los demandantes no resultaron acreditados con prueba objetiva e idónea y no se enmarcan dentro de la causal invocada, por lo que es menester la declaración de improcedente de su despido.

DÉCIMO QUINTO: Que, en lo que atañe a los despidos de otros trabajadores de los que dan cuenta cartas de despido y finiquitos aportados por la demandada, fuera de que no pueden ser considerados como fuente del proceso de invocado, sino que constituyen un efecto del mismo, no resultan aptos para configurar la causal invocada, por estar desprovistos de elementos objetivos que los sustenten. Sin el elemento objetividad, los cambios en las dotaciones de trabajadores, conforman una opción legítima desde la perspectiva del empresario, pero sujeta al riesgo propio de toda actividad económica, que debe ser asumido por el empleador.



Por otro lado, la nómina de finiquitos suscritos por trabajadores aportada por la demandada, tampoco puede estimarse suficiente para acreditar la casual invocada. Lo mismo acontece con la solicitud y control de patentes toda vez que, en ella sólo se consigna la fecha y motivo del término de los servicios de los trabajadores que en ella se individualizan, sin consignar el área específica en que cada uno se desempeñaba.

En cuanto a la carta de aviso de término de contrato de prestaciones de servicios y término del contrato de arrendamiento dirigido al Gerente General de San Vicente Terminal Internacional S.A. y suscrito por el Gerente General de Consorcio Madrero, no es más que una manifestación de voluntad de la empresa demandada en orden a no renovar el contrato y de poner término al contrato de arrendamiento, sin dar razones de tal decisión, por lo que no permite acreditar la causal de despido, puesto que no es más que una manifestación unilateral de voluntad del demandado. Ahora bien, en relación con el documento Solicitud y control de patentes, solo refiere en el trámite “Nulidad”, pero sin contener explicación alguna, por lo que tampoco permite acreditar las alegaciones de la demandada.

DÉCIMO SEXTO: Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, no es posible hacer efectivo el apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo respecto del absolvente Manuel Ernesto Sepúlveda Alarcón, quien no compareció, por cuanto no hay hecho desconocido alguno relevante del que se pueda presumir un hecho conocido; no existe ningún hecho de trascendencia que pudiera llevar a presumir los hechos descritos en las cartas de despido, ni elementos de contexto que pudieran conducir a tal presunción, ni mucho menos alguna prueba armónica o trascendente que seas coherente con la presunción que se solicita, lo que necesariamente lleva al rechazo de tal presunción. Por lo demás, en todas ellas se trata de una facultad, (con la expresión “podrá”) más no un imperativo categórico, que permite al juez determinar si es o no razonable hacer uso de la presunción para reforzar alguna otra prueba incompleta o insuficiente en el proceso, pero no para utilizarse cuando no existe antecedente de relevancia



alguna que pudiera llevar a esa presunción, lo que, en el caso de autos, no parece razonable conforme a la sana crítica y a las máximas de experiencia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, respecto a la devolución de aquel monto descontado por parte del empleador por aporte al Seguro de Cesantía, cabe señalar en primer término que no se encuentra discutido que el empleador descontó en los finiquitos por concepto de aporte de dicha parte a dicho seguro, las siguientes sumas:

I.- Respecto de ANDRÉS MARIANO STUARDO AMUNÁTEGUI: \$448.104.-

II.- Respecto de CRISTIAN RODRIGO VERGARA NÚÑEZ: \$1.446.233.-

III.- Respecto de VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ORELLANA: \$547.025.-

IV.- Respecto de MANUEL ERNESTO SEPÚLVEDA ALARCÓN: \$1.551.905.-

V.- Respecto de LUIS ALEJANDRO GATICA BRICEÑO: \$544.025.-

VI.- Respecto de MARCELO ANTDRÉS BECERRA BECERRA: \$378.810.-

VII.- Respecto de RAÚL ARNOLDO MELLA PARRA: \$756.956.-

En segundo lugar, cabe sostener que atendida la falta de justificación del despido por causal de necesidades de la empresa pretendida por la demandada, debe entenderse en consecuencia que nos encontramos ante un despido sin causa y, con ello, no resulta procedente el descuento por parte del empleador de su aporte al seguro de cesantía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.728, el que solo faculta el descuento cuando el contrato termina las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, pero al no haberse acreditado en autos la procedencia de la causal de necesidades de la empresa invocada por la demandante, se debe necesariamente entender que procede en la especie el referido descuento.

Así las cosas, no resulta razonable que se declare, por una parte, el despido como improcedente, esto es, que el acto jurídico emanado del empleador no satisface la exigencia legal para fundar el despido en un régimen de estabilidad relativa del empleo, para luego validar los efectos establecidos en el artículo 13 de la Ley N° 19.728 que supone un acto jurídico que satisface el estándar establecido por el legislador para poner término a la relación laboral por la causal de necesidades de la empresa.





establecido y, por el contrario, refuerzan las conclusiones a que se ha llegado en los considerandos precedentes. En efecto, tanto el contrato de trabajo de la actora anexos de contrato y modificaciones al contrato, carta de aviso de término del contrato de trabajo, comprobante de carta aviso, finiquito y certificado de saldo aporte empleador al seguro de cesantía se refieren a cuestiones no controvertidas.

DÉCIMO NOVENO: Que siendo totalmente vencida la demandada se le impondrá el pago de las costas.

POR ESTAS CONSIDERACIONES y VISTO lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 8, 161 a 168, 420 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 13 Ley 19.728, artículo 1698 del Código Civil SE DECLARA:

I.- Que se acoge la demanda deducida por ANDRÉS MARIANO STUARDO AMUNÁTEGUI, CRISTIAN RODRIGO VERGARA NUÑEZ, VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ORELLANA, MANUEL ERNESTO SEPÚLVEDA ALARCÓN, LUÍS ALEJANDRO GATICA BRICEÑO, MARCELO ANDRÉS BECERRA BECERRA, y RAÚL ARNOLDO MELLA PARRA, todos ya individualizados, en contra de CONSORCIO MADERERO S.A. representada por Luis Carretero Martínez, declarándose improcedente el despido de los y condenándose a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

I.- Respecto de ANDRÉS MARIANO STUARDO AMUNÁTEGUI:

- 1.- \$545.430.- por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.
- 2.- \$448.104.- por devolución del descuento improcedente del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía del actor.

II.- Respecto de CRISTIAN RODRIGO VERGARA NÚÑEZ:

- 1.- \$1.836.965.- por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.
- 2.- \$1.446.233.- por devolución del descuento improcedente del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía del actor.

III.- Respecto de VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ORELLANA:



1.- \$684.386.- por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

2.- \$547.025.- por devolución del descuento improcedente del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía del actor.

IV.- Respecto de MANUEL ERNESTO SEPÚLVEDA ALARCÓN:

1.- \$1.910.673.- por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

2.- \$1.551.905.- por devolución del descuento improcedente del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía del actor.

V.- Respecto de LUIS ALEJANDRO GATICA BRICEÑO:

1.- \$681.308.- por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

2.- \$544.025.- por devolución del descuento improcedente del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía del actor.

VI.- Respecto de MARCELO ANTDRÉS BECERRA BECERRA:

1.- \$396.875.- por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

2.- \$378.810.- por devolución del descuento improcedente del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía del actor.

VII.- Respecto de RAÚL ARNOLDO MELLA PARRA:

1.- \$1.034.167.- por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

2.- \$756.956.- por devolución del descuento improcedente del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía del actor.

II.- Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda.

III.- Que se condena en costas a la demandada, que se fijan en la suma de



\$700.000 (setecientos mil pesos) como suma única y total, al haber sido totalmente vencida.

Regístrese y en su lugar archívese.

Notifíquese a las partes por correo electrónico, si estuviesen registrados.

RIT O-567-2020

RUC 20- 4-0263773-1

Dictada por CLAUDIA ANDREA ETCHEBERRY BARRERA, Juez
Destinada al Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

En Concepción a veinte de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

